



**Tribunal Constitucional  
Secretaría General**

**Resolución de 18 de marzo de 2021 de la Secretaría General del Tribunal Constitucional, en relación con la solicitud de información formulada por [REDACTED] sobre certificación de firmeza de la STC 198/2004, de 15 de noviembre.**

En relación con la solicitud de información formulada por [REDACTED] sobre certificación de firmeza de la STC 198/2004, de 15 de noviembre, esta Secretaría General, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 99.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y en el artículo 25.1.c) del Reglamento de Organización y Personal, de 5 de junio de 1990, adopta la presente Resolución, con arreglo a los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos.

**ANTECEDENTES**

1. [REDACTED] a través del modelo de solicitud de acceso a la información pública de la página web del Tribunal Constitucional, interesó, en fecha 16 de marzo de 2021, certificación de firmeza de la STC 198/2004, de 15 de noviembre, dictada en el recurso de amparo 4127-2001.

Como motivo de su solicitud aduce que necesita aportar dicha certificación en un recurso de casación.

En su escrito señala la vía electrónica como modalidad de acceso a la información solicitada.



**Tribunal Constitucional**  
**Secretaría General**

**FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

1. El artículo 2.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que las disposiciones del Título I de esta Ley (que incluyen tanto la llamada “publicidad activa” como el derecho de acceso a la información pública) se aplican al Tribunal Constitucional “en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo”. *A sensu contrario*, tales disposiciones no resultan aplicables al Tribunal Constitucional en relación con su función jurisdiccional (arts. 53.2, 153.a) y 161 a 165 CE), por lo que el derecho de acceso a la información pública, en los términos previstos por el artículo 105.b) CE, desarrollado por la citada Ley 19/2013, no se extiende a la información sobre los procesos constitucionales tramitados ante este Tribunal como intérprete supremo de la Constitución (art. 1 LOTC) en el ejercicio de aquella función.

En este caso se interesa una certificación de firmeza de la STC 198/2004, de 15 de noviembre, dictada en el recurso de amparo núm. 4127-2001, asunto del que ha conocido la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en el ejercicio de su función jurisdiccional [arts. 161. b) CE y 2.1.b), 41 a 58 LOTC], por lo que la información solicitada excede del ámbito de aplicación de la Ley 19/2013.

2. El acceso a los documentos y actuaciones obrantes en los procesos constitucionales tramitados ante este Tribunal se rige por lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), bajo la competencia de los Secretarios de Justicia al servicio del Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80 y 101 LOTC y 30 y 31 del Reglamento de Organización y Personal de 5 de junio de 1990 (ROP).

Procede, en consecuencia, remitir la solicitud de información interesada a la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, a fin de que sea



**Tribunal Constitucional  
Secretaría General**

ésta quien determine si procede acceder a la misma y, en su caso, el medio en que dicho acceso pueda tener lugar.

Por cuanto antecede, esta Secretaría General

**RESUELVE**

Remitir a la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional la solicitud de información formulada por [REDACTED]

Frente a la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, podrá interponerse recurso de alzada ante el Presidente del Tribunal Constitucional, cuya decisión agotará la vía administrativa, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación.

F.D. Juan Carlos Duque Villanueva

SECRETARIO GENERAL ADJUNTO  
P.D. (ACUERDO DE 5/04/2017, BOE 17/04/2017)